

España, en riesgo de incumplir el plazo de ejecución de los fondos europeos

El país debe aumentar en un 29% la velocidad del gasto, según un informe de BBVA

Hasta finales de 2024 se habría ejecutado el 58% de todo lo previsto

DENISSE LÓPEZ
MADRID

A poco más de un año para que expire el plazo fijado por Bruselas para ejecutar la totalidad de los fondos europeos asignados, España sigue sin coger velocidad de crucero y está en riesgo latente de incumplir el calendario del plan de recuperación. Hasta finales de 2024 se habrían ejecutado 46.243 millones de euros, el 58% del total previsto, según los cálculos realizados por BBVA Research. Se trata de un porcentaje que, lejos de asegurar el cumplimiento, obliga a pisar el acelerador si se quiere evitar dejar dinero sobre la mesa.

Para agotar los recursos disponibles en el tiempo trazado por la Comisión Europea sería necesario aumentar la ejecución en un 29% respecto al ritmo actual, según las proyecciones del centro de estudios de la entidad financiera. Los analistas han

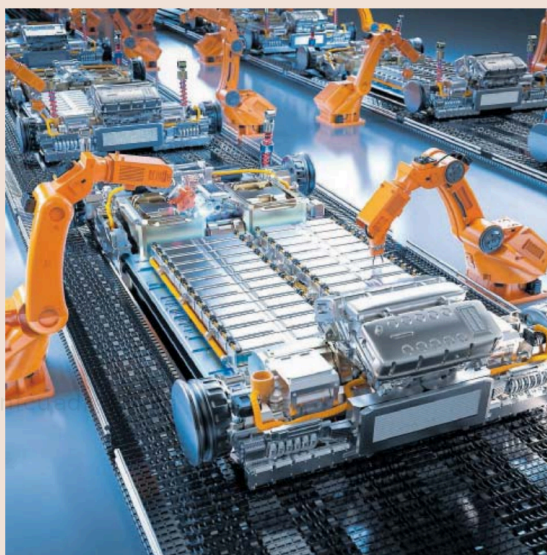
realizado su simulación tomando hasta el 31 de diciembre de 2026 como referencia porque es oficialmente cuando termina el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). No obstante, la normativa europea recoge que las inversiones deben estar completadas para agosto de ese año, lo que significa que potencialmente el empuje debería ser incluso mayor. En cualquier caso, bajo el supuesto de que fuese hasta el cierre del próximo año, al ritmo actual, España habría utilizado el 91% de los recursos asignados.

El análisis del centro de estudios viene a reafirmar lo dicho por Bruselas el verano pasado, cuando le pidió a España "esfuerzos renovados" para desplegar con éxito los fondos. Entre sus recomendaciones de aquel entonces, ya demandaba al país "acelerar las inversiones, responder a los retrasos y garantizar una capacidad administrativa robusta", algo que parece seguir en entredicho. Y alertaba sobre "los retos relativos a la capacidad de absorción", es decir, que el tejido productivo fuera capaz de tener proyectos y ejecutarlos para aprovechar estos fondos europeos. El diagnóstico no anticipa un fracaso, pero sí advierte de una creciente tensión entre el calendario y la capacidad

administrativa para transformar compromisos en gasto efectivo. El incremento necesario para cumplir con Bruselas supone pasar de los actuales 1.160 millones de euros de ejecución mensual a los 1.500 millones, una cifra que implica superar incluso los picos alcanzados a mediados de 2023. Desde aquel entonces, el volumen de licitaciones ha caído y el ritmo de adjudicaciones se ha estancado. Al respecto, el análisis de la entidad destaca que "los datos del primer trimestre de 2025 apuntan a que tanto las nuevas licitaciones como las adjudicaciones seguirían desacelerándose respecto al cierre de 2024".

El Gobierno central ha asumido la mayor parte de la ejecución, con un 64% del gasto comprometido, frente al 28% de las comunidades autónomas y una mínima parte correspondiente a otros organismos públicos. Mientras las comunidades han centrado sus esfuerzos en áreas como políticas sociales, cultura o transición energética, el Estado ha concentrado los recursos en infraestructuras, movilidad, digitalización y en los grandes Perte.

Estos proyectos estratégicos —que suman más de 21.000 millones de euros— han sido presentados como



ejes transformadores, pero algunos todavía tienen convocatorias sin resolver. Ese es el caso de las energías renovables, el hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA) y la economía circular, donde queda por adjudicar cerca del 50%.

Hay otros proyectos que ya están en marcha. Es el caso, por ejemplo, de la construcción de la gigafactoría de baterías eléctricas en Sagunto (Valencia), uno de los proyectos estrella del Perte del vehículo eléctrico y conectado. Pero los datos agregados muestran que el grueso del dinero sigue atascado en fases administrativas o todavía no ha llegado al terreno. Aunque se han licitado contratos y convocado ayudas por casi la totalidad del dinero previsto

Línea de montaje de robots con módulo de celdas de batería de coche eléctrico. GETTY IMAGES

El estudio advierte de que este año el ritmo de licitación se habría desacelerado

No existe la posibilidad de prorrogar el calendario más allá de 2026

hasta 2024 (79.607 millones sobre 79.870), lo cierto es que la ejecución real sigue muy por detrás. Las contrataciones están algo más avanzadas. De los 33.350 millones licitados, ya se han adjudicado el 71%. En subvenciones, sin embargo, solo el 48% del importe convocado ha sido efectivamente concedido. Peor aún, en el 40% de las convocatorias no se había registrado ninguna concesión a cierre del año pasado.

Estas cifras hacen patente la necesidad de pisar el acelerador, sobre todo porque no existe la posibilidad de prorrogar los plazos más allá de 2026. Para ello sería necesario que todos los países estuvieran de acuerdo en cambiar la regulación de los fondos, y eso parece improbable.

El primer informe de la Guardia Civil sobre el parón del domingo en alta velocidad apunta a "robo con fuerza"

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA /
JUANA VIÚDEZ
MADRID

El primer informe de la Guardia Civil sobre la sustracción del cableado de cobre que colapsó el pasado domingo la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla apunta como principal hipótesis el "robo con fuerza", según detallaron ayer fuentes conocedoras del contenido del atestado policial. Este documento ya ha sido entregado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

número 2 de Orgaz (Toledo) que se ha hecho de cargo de la investigación y cuyo titular ha abierto unas diligencias previas para investigar la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Las fuentes consultadas detallan que el informe del instituto armado no descarta otras líneas de investigación diferentes a la delincuencia común, pero destacan que el texto no recoge indicios

que sustenten la versión del supuesto sabotaje que el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió desde el primer momento. Puente llegó a afirmar que la acción fue "bastante coordinada" y que quien robó el cable en cinco puntos clave de la línea "sabía a lo que iba".

El documento policial, calificado por estas fuentes como un primer informe preliminar, se limita por ahora a recoger el contenido de la denuncia presentada por Adif, que fue quien alertó

del robo del cable, y el resultado de las pesquisas iniciales de los agentes en los cinco lugares de la línea separados por tan solo 10 kilómetros de distancia donde se produjeron robos de

El documento choca con la versión del sabotaje que defendió Puente

cable el domingo. El atestado sí hace hincapié en los daños especialmente graves que la sustracción provocó en un servicio esencial, como el transporte ferroviario, y que afectó a más de 16.000 personas entre el domingo y el lunes, con retrasos en los trenes que alcanzaron las nueve horas.

El ministro argumentaba sus sospechas en el escaso valor de lo robado (unos 300 euros, según las estimaciones de su departamento); la fecha elegida, el puente del

1 de mayo, y que el tramo de 10 kilómetros donde se produjeron los robos no tenía vigilancia. En la misma línea se manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegria. Esta mantuvo viva esta teoría al afirmar que "quienes ejecutaron este daño sabían muy bien el perjuicio, no eran fechas habituales. Era final de puente, empezaba la Feria de Abril... Había una clara voluntad de hacer daño".